



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0098/2017

FECHA: 21 de julio de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0098/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de noviembre de 2016, la ahora reclamante remite un escrito al Ayuntamiento de Campillo de Llerena -Badajoz- en el que tras exponer detalladamente una serie de consideraciones y actuaciones que se han llevado a cabo relacionadas con la existencia de un camino que discurre por unas parcelas de su propiedad, solicitaba, literalmente, que

*Dadas las dudas razonables de la titularidad pública del citado camino, que corre separando la parcela 8 con las parcelas 6 y 7, nos sea entregada toda la información pertinente relacionada existente en el Catálogo de Caminos Públicos de Extremadura, en el INFOEX, en el Plan General Municipal de Campillo de Llerena, y en el Inventario de Bienes Inmuebles que nos permita conocer con exactitud y sin ningún margen de error las dos cuestiones esenciales:*

- *Titularidad pública, con especificación de la fecha de la misma y condiciones de otorgación, si existen y*
- *La dedicación al uso público, ya que el dominio público (bienes demaniales) como bien del común de los ciudadanos, aunque su gestión esté encomendada a una administración, debe tener un uso*

[ctbg@conseiodetransparencia.es](mailto:ctbg@conseiodetransparencia.es)



*definido y conocido, y salvo motivos excepcionales, no puede tener otro.*

Mediante escrito notificado el 9 de enero de 2017, el precitado Ayuntamiento traslada a la ahora reclamante información catastral con indicación de la titularidad del inmueble de referencia. En concreto, se trata de copia de Ficha Catastral elaborada por la Gerencia Regional del Catastro de Extremadura en la que figuran la identificación del bien inmueble -clase, registro catastral, polígono, parcela, uso, superficie, etc.-, los titulares catastrales -el propio Ayuntamiento-, la valoración del suelo y los valores catastrales.

Con posterioridad, ante la consideración de que la información enviada no satisfacía la solicitud planteada, el 3 de febrero de 2017 la ahora reclamante remitió un nuevo escrito al Ayuntamiento de Campillo de Llerena en el que, tras indicar que la información catastral ya era conocida y obraba en su poder, reproducía la solicitud efectuada en el anterior escrito de fecha 24 de noviembre de 2016, a propósito de conocer la *Titularidad pública, con especificación de la fecha de la misma y condiciones de otorgación, si existen y La dedicación al uso público, ya que el dominio público (bienes demaniales) como bien del común de los ciudadanos, aunque su gestión esté encomendada a una administración, debe tener un uso definido y conocido, y salvo motivos excepcionales, no puede tener otro.* Concluyendo tal solicitud indicando que necesitan *Saber desde cuando el camino con referencia catastral [...] es público, en virtud de qué y por qué hecho o hechos, quién otorgó o cedió esa titularidad, mediante que documentos y cuál es la razón de serlo, es decir, que dedicación al uso público general tiene, cuál es el uso definido del mismo y cuál es su justificación*

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- sin haber recibido contestación a este última solicitud, la interesada la considera desestimada por silencio administrativo y, en consecuencia, mediante escrito registrado en esta Institución el 22 de marzo de 2017 interpone una reclamación ante este Consejo al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

2. Por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, el 22 de marzo, se dio traslado a la Junta de Extremadura del expediente de referencia, a fin de que, una vez trasladado al Ayuntamiento de Campillo de Llerena, se formularan las alegaciones que se estimasen por convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en que fundamentar las posibles alegaciones que se hubiesen planteado.

Mediante escrito registrado en esta Institución el 22 de mayo de 2017, se trasladan las alegaciones elaboradas por la Corporación municipal de referencia en las que se indica que se remite *“toda la documentación que obra en esta Entidad (Información Catastral) y que según consta en la misma, el*



titular es el Ayuntamiento de Campillo de Llerena desde 1989. En concreto, se adjunta copia de Ficha del Catastro y Consulta descriptiva y Gráfica de Datos Catastrales de Bien Inmueble.

### 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.

Asimismo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 24.6 de la LTAIBG, en relación con el apartado 2 de su Disposición adicional cuarta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Junta de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración Pública) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

2. Con carácter preliminar hemos de precisar el objeto de la presente Reclamación. De los antecedentes que obran en el expediente se deduce que el objeto de la originaria solicitud formulada por la ahora reclamante -cuya falta de contestación ha motivado esta Reclamación- consiste en obtener “toda la información” relacionada con el camino que corre separando la parcela 8 con las parcelas 6 y 7 de su propiedad existente en: el Catalogo de Caminos Públicos de Extremadura, en el INFOEX, en el Plan General Municipal de Campillo de Llerena y en el Inventario de Bienes Inmuebles municipal. Información, en virtud de la cual, según ha manifestado, se podrá determinar la titularidad pública con especificación de la fecha de la misma y las condiciones de otorgación y la dedicación al uso público.

De acuerdo con ello, en consecuencia, corresponde analizar a continuación el marco general del régimen jurídico de los caminos públicos, atendiendo a la regulación específica y a la de régimen local, con la finalidad de conocer cuál es la administración a la que corresponde elaborar la información solicitada en cada uno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior.

3. Por lo que respecta, en primer término, a la regulación especial cabe advertir que la vigente Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura ha derogado expresamente la anterior Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura -Disposición derogatoria única-. De este modo, la precitada Ley



6/2015, de 24 de marzo, aborda la regulación de los “caminos rurales” en su Título VI considerando como tales, en su artículo 170,

*«las vías públicas de comunicación terrestre de dominio y uso público que cubran las necesidades de acceso generadas en las áreas rurales, bien dando servicio a núcleos de población o a los predios agrícolas o forestales, incluyendo en su concepto la plataforma, el material del firme, las cunetas, las obras de fábrica, los desmontes, los terraplenes y las obras e instalaciones auxiliares que como tal se cataloguen (fuentes, abrevaderos, muros de piedra, descansaderos, etc., así como otros elementos de interés histórico y etnográficos; siempre que estos no resulten de propiedad privada) y que, por no reunir las características técnicas y requisitos para el tráfico general de vehículos automóviles, no puedan clasificarse como carreteras.*

*Dentro del concepto de caminos públicos, se incluyen los caminos y pistas forestales, incluidos en el dominio público forestal, de los montes propios de la Comunidad Autónoma y de los incluidos en el catálogo de Montes de Utilidad Pública, si bien se regirán por lo dispuesto en la legislación forestal.*

*No se consideran caminos, a efectos de esta ley, las calles, plazas, paseos, otros viales urbanos, los caminos de servicio bajo titularidad de las Confederaciones Hidrográficas, así como:*

- 1.º Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con autovías, autopistas y carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial.*
- 2.º Los caminos de naturaleza privada.*
- 3.º Las servidumbres de paso constituidas sobre una finca privada en beneficio de una o más personas, o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada, previa la correspondiente indemnización.»*

Esta regulación debe completarse con la previsión del artículo 9 de la hoy derogada Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura -precepto que ha sido sustituido por el actual artículo 174 de la referida Ley 6/2015, de 24 de marzo- a tenor del cual, «*las administraciones titulares de los caminos dispondrán en todo momento de un catálogo de los caminos y demás bienes inmuebles que integran el dominio público viario de su titularidad [...] La Junta de Extremadura procederá a la elaboración material del primer catálogo, que deberá ser aprobado por las administraciones titulares para que alcance su condición de catálogo oficial, siendo responsables de su conservación, revisión y actualización posterior*». En el caso del municipio de Campillo de Llerena la aprobación definitiva del Catálogo de Caminos se produjo el 13 de diciembre de 2005.

Finalmente, las anteriores previsiones han de complementarse desde la perspectiva orgánica. En este sentido, cabe recordar que el artículo 7.h) del



Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, atribuye a la Dirección General de Desarrollo Rural de dicha Consejería *«El ejercicio de las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado a la Junta de Extremadura en materia de caminos rurales así como la gestión y ejecución de programas destinados al mantenimiento y mejora de los mismos.»*

En este momento hay que recordar que las reglas generales sobre el procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información contenidas en el Capítulo III del Título I de la LTAIBG abordan la posibilidad de que en la tramitación de la solicitud, si “se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige”, éste ha de remitirla al competente informando de esta circunstancia al solicitante. Parece evidente que en el caso que ahora se trata, el Ayuntamiento de Campillo de Llerena ante la solicitud de acceso a la información presentada por la ahora reclamante con relación a la obtención de “toda la información” relacionada con el camino de referencia existente en el *Catálogo de Caminos Públicos de Extremadura* tendría que haber aplicado las previsiones que se contemplan en el transcrito artículo 19.1 de la LTAIBG. En este sentido, procede, en consecuencia, retrotraer las actuaciones al momento en que la solicitante presentó la solicitud a fin de que el Ayuntamiento remita la misma a la Consejería competente a fin de continuar con la tramitación de la misma en lo que respecta exclusivamente a la información obrante en el Catálogo de Caminos Públicos de Extremadura.

4. En cuanto a la regulación de régimen local que guarda una especial relación con la materia de “caminos”, cabe mencionar que el artículo 2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -desde ahora, RBEL- tras indicar que los bienes de éstas se clasificarán en bienes de dominio público y bienes patrimoniales, especifica en su apartado 2 que los bienes de dominio público serán de uso o servicio público. Añadiendo su artículo 3.1 que *«Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras publicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local.»*

Por su parte, desde la perspectiva de la conservación y tutela de los bienes, el artículo 17 del RBEL dispone en su apartado 1 que todas las Corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. De modo que, según se desprende de su artículo 18, en el inventario se reseñaran, por separado, según su naturaleza, los diferentes bienes, entre los que figura el epígrafe correspondiente a bienes Inmuebles. De acuerdo con ello, en el artículo 20 del RBEL se prevé que el inventario de los bienes inmuebles expresará los datos siguientes:

- a) Nombre con que fuere conocida la finca, si tuviere alguno especial.
- b) Naturaleza del inmueble.





- c) Situación, con indicación concreta del lugar en que radicare la finca, vía pública a que diere frente y números que en ella le correspondiera, en las urbanas, y el paraje, con expresión del polígono y parcela catastral, si fuere posible, en las rústicas.*
- d) Linderos.*
- e) Superficie.*
- f) En los edificios, características, noticia sobre su construcción y estado de conservación.*
- g) Tratándose de vías públicas, en el inventario deberán constar los datos necesarios para su individualización, con especial referencia a sus límites, longitud y anchura.*
- h) Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas.*
- i) Naturaleza de dominio público o patrimonial, con expresión de si se trata de bienes de uso o de servicio público, patrimoniales o comunales.*
- j) Título en virtud del cual se atribuyere a la Entidad.*
- k) Signatura de inscripción en el Registro de la Propiedad, en caso de que fuere inscribible.*
- l) Destino y acuerdo que lo hubiere dispuesto.*
- m) Derechos reales constituidos a su favor.*
- n) Derechos reales que gravaren la finca.*
- ñ) Derechos personales constituidos en relación con la misma.*
- o) Fecha de adquisición.*
- p) Costo de la adquisición, si hubiere sido a título oneroso, y de las inversiones efectuadas y mejoras.*
- q) Valor que correspondería en venta al inmueble, y*
- r) Frutos y rentas que produjere.»*

De los distintos preceptos de derecho positivo reseñados se puede concluir que los Ayuntamientos están obligados a confeccionar un Inventario de Bienes, debiendo incluirse en el mismo un epígrafe relativo a los Bienes Inmuebles con la información descrita en las letras a) a r) del artículo 20 del RBEL. En el caso que ahora nos ocupa, atendiendo al objeto de la controversia -información sobre un camino rural- resulta de especial trascendencia la información mencionada en las letras a), b), c), g), i), j) y o). De acuerdo con ello, en consecuencia, debe estimarse la reclamación en este aspecto concreto y, en suma la administración municipal ha de facilitar la información que obre en el Inventario de Bienes Inmuebles relacionada con el camino de referencia al tratarse de "información pública" a los efectos de la LTAIBG puesto que ha sido elaborada por un sujeto incluido en su ámbito de aplicación -artículo 2.1.a) de la LTAIBG- en el ejercicio de las funciones que el vigente ordenamiento jurídico atribuye a los Ayuntamientos en cuanto a la protección y defensa de sus bienes.

Por último, cabe advertir que, según se desprende de la información publicada en la propia página web institucional del Ayuntamiento de Campillo de Llerena, [[http://www.campillodellerena.es/plantilla.php?enlace=informacion\\_general](http://www.campillodellerena.es/plantilla.php?enlace=informacion_general)] éste entregó en depósito al Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz su Archivo Municipal en el año 2001, encontrándose organizado y descrito a través de un



Inventario. De este modo, dado que es conocido que la titularidad pública del camino de referencia data de 1989, según se desprende de la correspondiente Ficha Catastral, la administración municipal también había podido considerar remitir a la entonces solicitante a la Diputación provincial dado que es el órgano en el que puede obrar la información pretendida por la misma.

5. Finalmente, en tercer lugar, por lo que respecta a la obtención de “toda la información” relacionada con el camino de referencia existente en el Plan General Municipal de Campillo de Llerena, cabe advertir que dicho Plan se configura como “información pública” a los efectos de la LTAIBG, dado que se trata de información elaborada por un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia LTAIBG y ha sido obtenida y elaborada en el ejercicio de las funciones que, en materia de urbanismo y ordenación del territorio, le atribuye el vigente ordenamiento jurídico a los Ayuntamientos, requisitos que se contemplan en el artículo 13 de la LTAIBG al definir la noción de “información pública”. En este sentido, cabe señalar que el vigente Plan Urbanístico del municipio de referencia fue aprobado por Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal de Campillo de Llerena, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, n.º 241, de 19 de diciembre de 2011.

Dado que la Corporación municipal no ha invocado que en el presente caso concurra ninguna de las acusas de inadmisión de solicitudes previstas en el artículo 18 de la LTAIBG, así como tampoco ha alegado que proceda aplicar alguno de los límites a las solicitudes de acceso a la información previstos en el artículo 14, ha de estimarse la reclamación en este punto concreto, debiendo, en consecuencia, facilitar la Corporación municipal toda la información existente en el Plan General relacionada con el camino de referencia a la ahora reclamante.

### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

**PRIMERO.- ESTIMAR** la Reclamación presentada con relación a la información descrita en los Fundamentos Jurídicos 4 y 5 de esta Resolución, por tratarse de información pública en poder de un sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la administración.

**SEGUNDO.- RETROTRAER** las actuaciones en los términos del Fundamento Jurídico 3 a fin de que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento de Campillo de Llerena -Badajoz- remita la solicitud de acceso a la información con relación al Catálogo de Caminos de



Públicos de Extremadura a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio al objeto de que dicha solicitud de acceso a la información pueda continuar tramitándose el procedimiento establecido en el Capítulo III de aquella norma.

**TERCERO.- INSTAR** al Ayuntamiento de Campillo de Llerena a que en el plazo máximo de un mes proporcione la información solicitada y no satisfecha en los términos de los Fundamentos Jurídicos 4 y 5 de esta Resolución, remitiendo a este Consejo en igual plazo copia de la información trasladada al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017)  
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda